

Autor: Laura Nieto Sanabria

Licenciada en Sociología por la UNAM, maestrante en el PPELA, Universidad Nacional Autónoma de México. Participante en el proyecto PAPIIT Transformaciones recientes del Estado ampliado en América Latina, una aproximación desde la sociología política de Antonio Gramsci, y en la Ghilarza Summer School 2014. Correo: lauranietosanabria@gmail.com

ECONOMÍA VERDE Y DERECHOS DE LA NATURALEZA: EL PROYECTO SOCIO BOSQUE EN ECUADOR

(Green economy and Rights of Nature:
The 'Socio Bosque' Project in Ecuador)

Fecha de recepción: 18 de febrero de 2017

Fecha de aceptación: 26 de abril de 2017

Resumen: Los proyectos ecológicos y ambientales deben ser entendidos como proyectos políticos para comprender la relación de fuerzas que subyace entre ellos. La economía verde es entendida aquí como una forma de revolución pasiva del capitalismo que busca adueñarse de discursos radicales y opuestos al discurso hegemónico de acumulación capitalista con el fin de proliferar e introducirse poco a poco en diversas regiones del mundo. En el caso de Ecuador, la economía verde se introduce a partir de diversos programas gubernamentales en sintonía con mandatos internacionales, tal es el caso del Proyecto Socio Bosque; dentro de la relación de fuerzas que subyace en la economía verde se puede encontrar que ésta utiliza el discurso progresista de los Derechos de la Naturaleza, de manera tergiversada, para argumentar positivamente la entrada de proyectos neoliberales y mercantilizantes de la naturaleza. Así, a manera de revolución pasiva, la economía verde, con sus herramientas como Socio Bosque y REDD, logra adentrarse en la región latinoamericana haciendo uso de proyectos y discursos como el de los Derechos de la Naturaleza, despojándolos de su radicalidad y tergiversándolos de manera perversa, con el fin de comercializar los llamados servicios ambientales.

Palabras clave: Economía verde, Derechos de la Naturaleza, revolución pasiva, Proyecto Socio Bosque.

Abstract: The ecological and environmental projects have to be understood as political projects to comprehend the relation of forces that underlies between them. The green economy is here understood as a form of passive revolution of capitalism that looks forward to own radical and opposite discourses, antithetical to the hegemonic discourse of capitalist accumulation, with the purpose of proliferate and get inside, little by little, in many regions of the world. In Ecuador's case, the green economy is introduced by several governmental programs in tune with international mandates, that's the case of the Socio Bosque project; inside the relation of forces that underlies in the green economy, one can find that this one uses the progressive speech of the Rights of Nature, in a twisted way, to positively argue the entrance of neoliberal and nature's merchandizing projects. So on, in a passive revolution kind of way, the green economy, with its tools as Socio Bosque and REDD, achieves to get inside the Latin American region using projects and discourses like de Rights of Nature, stripping them out of its radicalism and twisting them in a perverse way, aiming towards commercialize the so called environmental services.

Key words: Green economy, Rights of Nature, Passive revolution, Socio Bosque project.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



56

Ene 2018-Jun 2018

Nuestrapraxis. Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica Jurídica, año 1 / no. 2, Ene-Jun 2018, pp. 56-74. ISSN 2594-2727.

1. Introducción: revolución pasiva, economía verde y derechos de la naturaleza.

El presente artículo es una breve recapitulación del trabajo que he llevado a cabo en Ecuador. Éste forma parte de un trabajo más extenso de tesis donde parto de la idea de que en América Latina existe una gran diversidad de proyectos ambientalistas y/o ecologistas que, al mismo tiempo, forman parte de proyectos políticos varios e ideológicamente diferentes, e incluso opuestos, pero que en ciertos momentos y contextos pueden entrelazarse al ser estos parte de un bloque histórico específico en donde convergen distintas relaciones de fuerza.

En el trabajo extenso de tesis argumento que, en general, se pueden rastrear tres tipos de proyectos ecológico-políticos dentro de la región latinoamericana: la economía verde, que sería el proyecto más conservador y afín a la acumulación capitalista, el proyecto hegemónico; el ambientalismo y ecologismo de los países progresistas que tienen Derechos de la Naturaleza en sus Constituciones; y los movimientos eco-territoriales, que a menudo no suelen denominarse ecologistas ni ambientalistas, pero que luchan por la conservación de su territorio y los recursos naturales que están dentro de éste para su sobrevivencia, éste último sería el proyecto más radical que, de cierta forma, se opone a las relaciones de producción actuales.

El enfoque primordial de la investigación es sobre el proyecto hegemónico de la ‘economía verde’ y es analizado desde una perspectiva marxista, sobre todo desde la teoría política de Antonio Gramsci. A partir de uno de los conceptos formulados por dicho autor, la revolución pasiva, es que analizo la inserción de la economía verde sobre América Latina. Para Gramsci, la revolución pasiva refiere a la cooptación y el debilitamiento de las fuerzas subalternas para garantizar un proyecto de dominación¹ por parte de las clases dirigentes; funciona, pues, como neutralización de las demandas populares apelando a un discurso progresista, ello con el fin de legitimarse políticamente, poniéndose a la cabeza de los cambios.² En ese sentido, la economía verde, a partir de un discurso supuestamente ecologista contra el cambio climático, busca ser hegemónica a partir de la iniciativa privada, a partir del mercado, como si la mercantilización del clima y la contaminación fueran la solución a las mismas; así, funciona como una transformación reformista de acumulación capitalista. Entonces, tal proyecto político-económico es revolución pasiva porque con ello no se toca a la clase dominante en su ganancia, sino que se hacen modificaciones de regulación y control, con la ayuda de los Estados y de organizaciones corporativas específicas que permiten, incluso, que empresas y países enteros se enriquezcan aún más comerciando con los, ahora llamados, ‘servicios ambientales’. Es por ello que una crítica a la economía verde implicaría entenderla como un modelo de producción que a su vez necesita de una voluntad colectiva específica y de un Estado que vele por ella en materia legal.

En la misma línea, y retomando a Eric Swyngedouw, hoy en día existe “un consenso virtualmente irrefutable acerca de la necesidad de ser más ambientalmente sostenibles”³ para evitar una catástrofe natural apocalíptica que lleve al fin de la humanidad y del mundo como lo conocemos;

1- Modonesi, Massimo (coord.), *Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci*, México, UNAM, 2013. 311 páginas.

2- Kohan, Néstor, “La gobernabilidad del capitalismo periférico y los desafíos de la izquierda revolucionaria. Crisis orgánica y revolución pasiva: el enemigo toma la iniciativa”. Disponible en: <<http://www.rebellion.org/noticias/2006/10/40194.pdf>>. Consultado: 10/2006.

3- Swyngedouw, Erik, “La naturaleza no existe: La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada”, en *Urban 1*, 2001, p. 41-66. P. 50.



estas nociones son entendidas por él como ecologías del miedo que funcionan como un nuevo opio de las masas.⁴ Así, podemos pensar en la economía verde, con sus múltiples productos supuestamente ‘amigables con la naturaleza’, como una nueva forma de indulgencias, las indulgencias del siglo XXI. Estos discursos alimentan un mensaje reaccionario y conservador, que enuncia el evitar la catástrofe a partir de medidas técnicas y gerenciales para que la vida continúe de la misma manera que hasta hoy, es decir, para que la hegemonía del capitalismo siga reproduciéndose con herramientas como la revolución pasiva de la economía verde:

“se construye un guión en torno a la sostenibilidad entendida como una serie de dispositivos técnicos-directivos, a menudo caracterizados como radicales o innovadores, que deben asegurar que la civilización tal y como la conocemos pueda continuar -es decir, se llama a una revolución sin cambio revolucionario.”⁵

El funcionamiento de la economía verde es, pues, bastante complejo ya que se envuelve en discursos que aparentan ser revolucionarios y con fines de bienestar social y ambiental. Al mismo tiempo, varios organismos internacionales la apoyan, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de varias ramas como el informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Convenio Marco sobre Cambio Climático, etcétera, de donde deriva una gran variedad de programas y proyectos que van encaminados, sobre todo, a países periféricos o subdesarrollados, es decir, a regiones como América Latina, África y partes de Asia. En este sentido, Anna Tsing cuestiona el hecho de que, justamente, este tipo de convenios y declaraciones ven la problemática del cambio climático y la catástrofe ambiental como un asunto de carácter global, como si toda la humanidad fuera responsable en mismo grado y medida de lo que acontece hoy en día. Para la autora, lo anterior funciona como una herramienta política clave,⁶ sobre todo porque los proyectos ambientales más poderosos e institucionalizados “se despachan desde las metrópolis hasta las periferias.”⁷ Esto último bien se podría entender como una nueva forma de imperialismo, un tipo de neo-colonialismo donde los países centrales dictan nuevas formas de explotación, tanto de la naturaleza como de la humanidad, asentadas sobre un sinfín de discursos y leyes internacionales que lo favorecen.

Ahora bien, a partir de concebir a los proyectos ambientales como proyectos políticos, debemos tomar en cuenta las relaciones de fuerza que subyacen entre los mismos. Como vimos anteriormente, la economía verde funciona de maneras complejas y se apropia de diferentes discursos e ideas para proliferar. En el caso de Ecuador habría que ver, pues, cómo han jugado las relaciones de fuerza respecto tanto de la entrada de la economía verde como sobre los llamados Derechos de la Naturaleza, los cuales podríamos entender como un proyecto político que, en principio, se opondría a la economía verde.

Primero, habría que decir que Ecuador había tenido incursiones en las firmas de tratados internacionales que sugerían, desde ese entonces, un inicio de la economía verde, como por ejemplo la adscripción a la Convención para la Diversidad Biológica al Convenio Marco sobre Cambio

4 Swyngedouw, Erik, “La naturaleza...”, óp. Cit. P. 51. En referencia a Alain Badiou.

5 Swyngedouw, Erik, “La naturaleza...”, óp. Cit. P. 52.

6 Tsing, Anna, “La naturaleza en construcción”, en: Montenegro Martínez, Leonardo (ed.), *Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de la independencia de Colombia*; Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestion Mutis; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. P. 196-224; P. 207

7 Tsing, Anna, “La naturaleza en...”, P. 209.



Climático, mediante la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)⁸ que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro.⁹ A partir de estos mandatos internacionales, Ecuador resolvió la creación del Ministerio del Ambiente (MAE) en 1996.¹⁰

En segundo lugar, la Asamblea Constituyente, instalada el 29 de noviembre de 2007 en Ciudad Alfaro, Montecristi, aprobó la nueva Constitución el 28 de septiembre de 2008 con un referéndum obteniendo el 64% de aprobación. En ésta existe una gran cantidad de artículos referidos a temas ambientales, incluye la sección de derechos de la naturaleza y de derechos ambientales desde la ciudadanía, ambos enfocados bajo la perspectiva del Buen Vivir.¹¹ Hay que decir que, en específico, el tema de los Derechos de la Naturaleza resultó ser un campo muy polémico de discusión dentro de la Asamblea,¹² sin embargo, los artículos en relación a los derechos de la naturaleza (artículos 71, 72, 73 y 74), que van en contra de una mercantilización de la misma, que buscan protegerla y dejar de sobreexplotarla, así como restaurarla y evitar la apropiación de sus riquezas por entes privados, fueron aprobados en su totalidad.

Al respecto de los Derechos de la Naturaleza, habría que rescatar varias cosas. Por una parte, la lucha que se dio para que la Naturaleza fuera reconocida como sujeto de derechos fue una cuestión social, de lucha desde las comunidades indígenas y organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), grupos de activistas y algunos grupos y personas de la izquierda ecuatoriana. Fue, en realidad, un gran logro por parte de algunos congresistas, intelectuales, y de una parte de la sociedad civil ecuatoriana, ya que se consiguió romper con varios paradigmas del Derecho clásico y se recuperó la noción indígena de Pachamama. Sin embargo, sin negar la enorme conquista a base de las fuertes disputas por el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, habría que decir también que, en realidad, estos derechos no han sido del todo respetados o, mejor dicho, han sido tergiversados de una forma bastante perversa y, si es que ello no logra resolverse, seguirán siendo manipulados de una manera poco favorable para la misma naturaleza y la humanidad en general.

Esto último envuelve un debate muy amplio que, por cuestiones de espacio, no se puede exponer en este ensayo, pero habría que retomar un par de críticas que me parecen fundamentales para la cuestión de los Derechos de la Naturaleza. José Sánchez Parga, por ejemplo, critica profundamente a estos derechos ya que dice que funcionan como “nuevas inspiraciones ideológicas agazapadas en discursos de apariencia progresista”;¹³ asimismo le llama política evasiva y reaccionaria

8- En este convenio refiere a “tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. El Convenio sobre la Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más.” Disponible en <http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml>, consultado en 10 de noviembre de 2012.

9- Disponible en: <http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml>, consultado el 13 de abril de 2014.

10- Gudynas, Eduardo. *El mandato ecológico: Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución*. Quito, Ecuador, Ediciones Abya Yala, 2009.

11- Al respecto, ver: Gudynas, Eduardo. *El mandato ecológico...*

12- Ávila Santamaría, Ramiro y Martínez, Esperanza, (ed), *El neoconstitucionalismo transformador: El estado y el derecho en la Constitución de 2008*, Quito, Editorial Abya Yala, Universidad Andina Simón Bolívar, 2011.

13- Sánchez Parga, José. *Discursos retroevolucionarios: Sumak Kausay, derechos de la naturaleza y otros pachamamismos*. En Revista



que manipula las tradiciones indígenas. Otro autor que llama la atención respecto de ello es el ya citado Eric Swyngedouw; éste dice que el concepto de naturaleza es algo demasiado relativo y que el hacer uso de éste en la cuestión jurídica puede generar la fetichización del mismo, logrando una despolitización de la sociedad frente a las contradicciones del sistema imperante.¹⁴ No obstante estas críticas, para entender a grandes rasgos la problemática que surge con los Derechos de la Naturaleza y su tergiversación por parte de la economía verde, es de suma importancia analizar un caso concreto, al respecto elegí el Proyecto Socio Bosque de Ecuador.

El Proyecto Socio Bosque (PSB) resulta de particular interés para esta investigación ya que es un programa gubernamental que, de cierta forma, está incentivando la entrada de la economía verde al Ecuador haciendo, al mismo tiempo, uso de los Derechos de la Naturaleza dentro de la Constitución ecuatoriana para justificarse. Es, pues, una herramienta dentro de la revolución pasiva de la economía verde, que ayuda a dar continuidad a la acumulación de capital a base de proseguir con la explotación tanto de la naturaleza como de las personas habitantes de países latinoamericanos como Ecuador. A continuación, muestro un repaso de todos los factores que sustentan lo antes dicho, pasando por un recuento de las normatividades del Proyecto Socio Bosque, así como los artículos constitucionales sobre los que está basado, sus fuentes de financiamiento y su relación con el proyecto internacional de REDD+.

2. Sobre el Proyecto Socio Bosque del Ministerio del Ambiente de Ecuador

El 14 de noviembre de 2008 se estableció el Proyecto Socio Bosque (PSB) del gobierno de la República del Ecuador, mediante el Acuerdo Ministerial NO. 169, con Max Lascano Vaca como gerente del proyecto. Sus objetivos son,

“lograr la conservación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras formaciones vegetales nativas del Ecuador, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el efecto de la deforestación; y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de poblaciones rurales asentadas en dichas áreas”.¹⁵

Asimismo, la meta del PSB “es la conservación de más de 3.600.000 hectáreas de bosque nativo, páramo y otras formaciones vegetales nativas en el Ecuador; con la participación de 500.000 a 1.500.000 beneficiarios”.¹⁶

El proyecto funciona a base de incentivos económicos que el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) otorga a los inscritos dos veces por año (mayo y octubre), los beneficiarios deben resguardar y conservar los bosques, páramos o manglares de su territorio. En los mismos plazos, las comunidades o colectivos dentro del proyecto deben hacer una rendición de cuentas de acuerdo a un plan de inversión, en donde los firmantes deben facturar y presentar un informe. El dinero se puede gastar según cuatro rubros: conservación y consolidación territorial, desarrollo social y

Ecuador Debate, no. 84, Quito, Ecuador, diciembre 2011. P. 31.

14- Ver: Swyngedouw, Erik, “La naturaleza...”, óp. Cit.

15- En <http://sociobosque.ambiente.gob.ec/> consultado el 14 de abril de 2015.

16- Ídem.



cultural, desarrollo económico y productivo, fortalecimiento de órganos de gobierno y gasto administrativo. Tal plan de inversión debe ser una decisión colectiva, hecha en asamblea, cuando se trata de los colectivos o comunidades inscritas. Cabe decir que el convenio tiene una duración de 20 años, contados desde la fecha de su suscripción, el mismo que se puede renovar por igual período si ninguna de las partes notifica anticipadamente a la otra en un plazo mínimo de 365 días.

El Ministerio realiza seguimiento y monitoreo con el fin de verificar el cumplimiento del convenio y brinda asistencia a los ejecutores sobre asuntos relacionados al mismo. Las obligaciones de los ejecutores, los propietarios de los territorios a conservar, son las siguientes:

- a) “No talar el Área Bajo Conservación;
- b) No cambiar el uso del suelo del Área Bajo Conservación;
- c) No quemar el Área Bajo Conservación
- d) No realizar pastoreo en el Área Bajo Conservación;
- e) No realizar actividades que alteren el comportamiento natural o que amenacen la capacidad de dar refugio a la biodiversidad, alteren las condiciones hidrológicas naturales o reduzcan el almacenamiento de carbono por efecto de tala del Área Bajo Conservación;
- f) No cazar con fines comerciales o deportivos en el Área Bajo Conservación;
- g) Informar, dentro de cinco días, al Proyecto Socio Bosque sobre transferencias o limitaciones de dominio al predio beneficiario del incentivo;
- h) Prevenir incendios en el Área Bajo Conservación y/o informar dentro de cinco días posteriores a su acontecimiento al Proyecto Socio Bosque y otras autoridades competentes;
- i) Permitir el acceso del personal del Proyecto Socio Bosque al Área Bajo Conservación, y facilitar su labor;
- j) Identificar adecuadamente el Área Bajo Conservación con rótulos ubicados a distancias convenientes a acordar con el Proyecto Socio Bosque;
- k) Entregar al Proyecto Socio Bosque la información que sobre el estado del Área Bajo Conservación le sea requerida;
- l) Cumplir con lo previsto en los Planes de Inversión.
- m) Informar al Proyecto sobre eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten el Área Bajo Conservación, o que pudieran alterar el normal desenvolvimiento de este Convenio, como por ejemplo: modificaciones en el Plan de Inversión, invasiones, etc.
- n) Entregar información legítima, tanto personal como del Área Bajo Conservación, presentada para la suscripción del presente convenio.
- o) Entregar cada dos años una declaración juramentada mencionando que el área bajo conservación se encuentra en iguales condiciones que a la fecha de su ingreso al Proyecto y que se ha realizado un buen uso de los recursos entregados por el Ministerio del Ambiente.
- p) Entregar cada dos años un certificado de gravámenes actualizado sobre el predio que contiene el área bajo conservación.”¹⁷

17- Ídem.



Los subrayados son nuestros. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, ocurre una suspensión de la transferencia del incentivo o terminación anticipada y unilateral del convenio suscrito con el PSB. Cabe decir que la suspensión temporal del programa para algún territorio no existe, es únicamente pérdida del incentivo; después de una tercera pérdida se convierte en salida anticipada, por lo que se tiene que devolver el dinero íntegro de lo que el PSB otorgó a él o los beneficiarios. Existen dos motivos que sugieren la pérdida del incentivo: que no se haya cumplido la conservación del territorio o que no se haya hecho la rendición de cuentas. Las primeras veces que hay pérdidas se descuenta el pago hasta que se vuelvan a presentar todas las rendiciones de cuentas de los meses anteriores; puede ser que esa rendición esté mal hecha y no esté bien respaldada, por lo tanto será ilegítima y no pasará la prueba.

Por otro lado, cualquier persona natural o jurídica (individuos o colectivos) puede salir del convenio en cualquier momento si así lo desea, pero en este caso se tiene que devolver todo el dinero que se le otorgó durante el periodo que estuvo dentro del programa.

2.1 Artículos constitucionales que sustentan al Proyecto Socio Bosque

Resulta fundamental resaltar que en el documento de Convenio de Ejecución entre el PSB del MAE con el o los beneficiarios del proyecto, se comienza aludiendo al artículo 71 de la Constitución¹⁸ que, como hemos visto, es el primer artículo que expresa los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de Montecristi. De igual forma, todos los documentos en relación a acuerdos ministeriales sobre el PSB firmados por el MAE hacen un citado expreso de tres artículos en relación a los Derechos de la Naturaleza:

“El artículo 71 reconoce a la *naturaleza*, donde se reproduce la vida, el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales; el tercer inciso determina que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. (...) El artículo 72 reconoce a la naturaleza el derecho al mantenimiento y restauración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. (...) El artículo 74 determina que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las *riquezas naturales* que les permitan el buen vivir.”¹⁹

Sobre la base anterior, en tales documentos se alude también a los siguientes artículos:

18- Convenio de Ejecución entre el Proyecto Socio Bosque del Ministerio del Ambiente y Ejecutor. Ministerio del Ambiente, PSB. Disponible en: <http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/images/articulos/archivos/convenio-colectivos-bosque1.pdf>; consultado el 14 de abril de 2015.

19- Acuerdo Ministerial, cualquier folio desde 2008. Ministerio del Ambiente, PSB.



- - El artículo 5 de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre: “señala como funciones y atribuciones del MAE, velar por la conservación de los *recursos forestales y naturales* existentes”.²⁰
- - El artículo 3° de la Constitución establece en los numerales 5 y 7 que “son deberes primordiales del Estado la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sustentable y la protección del *patrimonio natural* del país.”²¹
- - El artículo 14 “reconoce el derecho de la población a vivir en un *ambiente sano y ecológicamente equilibrado*, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”²²
- - El artículo 86 numeral 6 “establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los *recursos naturales* de modo racional, sustentable y sostenible.”²³
- - El artículo 276 numeral 4, “uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un *ambiente sano y sustentable* que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.”²⁴
- - El artículo 395 numeral 1, “el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas; y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.”²⁵
- - El artículo 397, numeral 2, “declara el compromiso del Estado a establecer mecanismos de manejo sustentable de los recursos naturales.”²⁶

20- Acuerdo Ministerial, todos los folios desde 2008. Ministerio del Ambiente, Proyecto Socio Bosque.

21- Ídem.

22- Ídem.

23- Ídem.

24- Ídem.

25- Ídem.

26- Ídem.



- - El artículo 400 “declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y el patrimonio genético del país.”
- - El artículo 404 “determina que el patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción.”²⁷
- - El artículo 406 “establece que el Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos.”²⁸

Como se puede observar, en el subrayado nuestro, la obligación estatal que imponen los Derechos de la Naturaleza para incentivar la protección de la misma es lo que se resalta, en primera instancia, para justificar el Proyecto Socio Bosque. Al respecto cabe decir que, según la mayoría de los artículos, el proyecto de desarrollo se puede fácilmente ligar con el supuesto respeto hacia los Derechos de la Naturaleza; en concordancia a ello, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) declaró que el Proyecto Socio Bosque es un proyecto prioritario.²⁹

Por otro lado, resulta interesante la diversidad de conceptos utilizados en los artículos anteriormente citados: naturaleza, riqueza natural, patrimonio natural, ambiente sano y ecológicamente equilibrado, recursos forestales y naturales, desarrollo sustentable.

Si bien se comienza hablando de los Derechos de la Naturaleza, en donde ésta reproduce la vida, con ciclos, funciones y procesos evolutivos vitales, se puede observar que se emplean otros términos que podrían parecer idénticos; sin embargo la ambigüedad de los mismos puede resultar engañosa y ser utilizada con fines distintos a la mera protección de la naturaleza como lo estipulado en los artículos 71 al 74. Según Anna Tsing, la retórica ambientalista tiene una amplia aceptación en la que, no obstante, nadie se pone de acuerdo “sobre lo que debería hacer esta retórica para los humanos y la naturaleza,”³⁰ en ese sentido la diversidad de conceptos al interior de la Constitución de Montecristi sobre lo que es la naturaleza y el medio ambiente conduce a una gran confusión como ya lo menciona Tsing, no se sabe si es “uso sensato o preservación; privatización, patrimonio nacional o autonomía tribal”,³¹ etcétera.

A mi parecer, el concepto de naturaleza referido en los artículos difiere de todos los demás, ya que desde la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza ésta se entiende desde una visión biocéntrica, muy aparte de las utilidades o beneficios que pueda tener para la humanidad, por ello es que sus derechos son independientes de los derechos ambientales, los cuales se enfocan en el derecho que tienen las personas a un ambiente sano. Los términos de riqueza natural, patrimonio natural, y de ambiente sano y ecológicamente equilibrado, aluden, pues, a los derechos

27- Ídem.

28- Ídem.

29- Senplades, Oficio No- SENPLADES-SIP-dap-2008-21 de fecha 2 de Julio de 2008.

30- Tsing, Anna, “La naturaleza en...”, Op. Cit. P. 196

31- Tsing, Anna, “La naturaleza en...”, Op. Cit. P. 196



ambientales, desde una perspectiva más antropocéntrica ligada al bienestar social y al *sumak kawsay*, lo cual no se contradice del todo con los Derechos de la Naturaleza y, es más, puede converger de una misma forma en varios niveles. En tercer lugar, y es aquí donde hay que llamar más la atención, se encuentran los conceptos de recursos naturales y desarrollo sustentable; estos dos aluden más a una perspectiva de producción, de uso de la naturaleza para mercantizarla y explotarla en pos de un desarrollo, aunque sea desde una perspectiva de cuidado y manejo responsable y sostenible; en términos de Swyngedouw podríamos decir que ambas nociones conllevan un discurso que tiende a la despolitización de la misma naturaleza y de la humanidad.

Al respecto del punto anterior, se podría hablar de una nueva forma de mercantizar a la naturaleza a partir de los servicios ambientales dentro de un discurso, supuestamente, ambientalista y de desarrollo. Según el Manual Operativo del PSB, las áreas prioritarias para la implementación del proyecto se definirán, en primer lugar, por el nivel de amenaza según la cercanía a vías de acceso y a los patrones históricos de deforestación; en segundo lugar, se prioriza según los servicios ambientales como refugio de biodiversidad, regulación hidrológica y almacenamiento de carbono;³² en tercer lugar se prioriza el nivel de pobreza de la población.³³ El segundo punto de las prioridades de Socio Bosque refiere, pues, a los servicios ambientales, los cuales se traducen en un nuevo tipo de mercancías como los bonos de carbono; de acuerdo con el documento, la variable de almacenamiento de carbono se define como “la cantidad almacenada de carbono en los diferentes tipos de bosques nativos, páramos y otras formaciones vegetales nativas, definida en función de la biomasa”.³⁴

Asimismo, podemos encontrar en el inciso ‘e’ de las obligaciones de los ejecutores del PSB (subrayado anteriormente), que no se deben realizar actividades que amenacen la capacidad de dar refugio a la biodiversidad, que alteren las condiciones hidrológicas o que reduzcan el almacenamiento de carbono; de esta forma, resguardar los servicios ambientales de los territorios inscritos es una de las prioridades más importantes para el PSB. Al respecto se puede llegar a la idea de que el PSB está en busca de mercantizar a la naturaleza, que se supone debe de conservar y respetar, a base de nuevas estrategias dictadas desde los organismos internacionales.

¿Qué es, entonces, un bono de carbono y cómo se inserta dentro de un programa como Socio Bosque?

2.2 El mercado de carbono, REDD+ y Socio Bosque

El mercado de carbono surge en un contexto neoliberal. Según Neil Brenner, Peck y Theodore, el neoliberalismo adquiere relevancia a fines de los años 70s como respuesta a la crisis del modelo fordista-keynesiano, reconstituyendo relaciones estatales, económicas y financieras, a escalas tanto nacionales como regionales e internacionales.³⁵ Las doctrinas neoliberales funcionaron para justificar varios proyectos:

32* “Refugio de biodiversidad : Esta variable se define mediante el uso de información geográfica que determina la superficie de formaciones vegetales nativas remanentes que se encuentran fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Las formaciones vegetales con baja representatividad en el SNAP tendrán mayor prioridad. Regulación Hidrológica: Esta variable considera áreas importantes para la generación y regulación del recurso hídrico considerando sus potenciales usos. Almacenamiento de Carbono: Esta variable se basa en la cantidad almacenada de carbono en los diferentes tipos de bosques nativos, páramos y otras formaciones vegetales nativas, definida en función de la biomasa.” Información del Manual Operativo PSB, MAE, 2010.

33- Manual Operativo PSB, MAE, 2010. Disponible en: <http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/MANUAL%20OPERATIVO%20SB%20UNIFICADO%202012.pdf>, consultado el 14 de abril de 2015.

34- Ídem.

35- Brenner, Neil, et al., “El urbanismo neoliberal: La ciudad y el imperio de los mercados”, en *Temas Sociales*, Número 66, año 2009, p. 1-11.



“la desregulación del control del Estado sobre la industria; las ofensivas en contra del trabajo organizado; la reducción de impuestos corporativos; la contracción y/o privatización de los recursos y servicios públicos; el desmantelamiento de los programas de bienestar social; la ampliación de la movilidad del capital internacional; y la intensificación de la competencia entre localidades.”³⁶

Y hoy en día podríamos agregar que el neoliberalismo dio entrada a una nueva forma de lucrar con los recursos naturales a manera de servicios ambientales, ello en base, también, a la crisis de acumulación capitalista que se comenzó a gestar en el momento en que el incremento de la dificultad de extraer recursos comenzó a menguar en los saldos de capital. Así pues, la crisis financiera se entrelazó con una crisis ambiental que para Enrique Leff es, asimismo, una crisis de conocimiento que fomentó formas insustentables de vida.³⁷

De tal manera, bajo el discurso en relación a mitigar el problema del calentamiento global y el cambio climático a partir de controlar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), subyace el ímpetu por controlar las crisis financieras a partir del mercado de servicios ambientales y, más específicamente, el de bonos de carbono. Tal mercado fue propuesto por primera vez en la década del sesenta “por economistas estadounidenses negociantes de derivados y materias primas y grupos ambientalistas súper verdes y alianzas comerciales de Washington,”³⁸ pero hasta la década de los noventa fue aprobado en Europa y Estados Unidos, aunque de maneras diversas.

Según Larry Lohmann, el mercado de carbono se basa en un método de tope y trueque que,

“se presenta como un sistema concebido para que a las empresas les salga más barato reducir sus emisiones. La idea fundamental es que los gobiernos reparten un número limitado de permisos para contaminar, que la escasez de estos permisos fomenta el incremento de sus precios y que, por tanto, ese costo adicional anima a las industrias y a los productores de energía a contaminar menos.”³⁹

Así, los bonos de carbono son las llamadas Reducciones Certificadas de Emisiones de Gases Efecto Invernadero. Un bono de carbono “es la unidad que corresponde a una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (...) son créditos que se transan en el Mercado del Carbono”.⁴⁰ La manera en que funciona la compra y venta de bonos de carbono se basa en que los países desarrollados o grandes empresas puedan financiar proyectos de absorción de carbono en países en vías de desarrollo, “acreditando tales disminuciones como si hubiesen sido hechas en territorio propio, abaratando significativamente los costos de cumplimiento”.⁴¹ Es decir que son “mercados que usan la capacidad de la tierra para reciclar el carbono como una mercancía”.⁴²

36- Óp. Cit. P. 2.

37- Leff, Enrique., “Sustentabilidad y racionalidad ambiental: hacia “otro” paradigma de sociología ambiental”, en *Revista Mexicana de Sociología*, 73 (1), 2011, p. 5-46.

38- Lohmann, Larry. *Mercados de carbono, la neoliberalización del clima*, Alberto Acosta y Esperanza Martínez (compiladores), ediciones Abya Yala, Quito, Ecuador, 2012.p 328.

39- Lohmann, Larry. Op. Cit. P. 59.

40- En: Sinia, Chile. <http://www.sinia.cl/1292/w3-article-48291.html>; consultado el 18 de agosto de 2015.

41- Ídem.

42- Lohmann, Larry. “Mercados de carbono ...” Op. Cit. P. 229.



Cabe decir que el mercado de carbono internacional resulta ser un gran negocio, uno de los más redituables, ya que comercia actualmente más de 100 mil millones de dólares anuales, por lo que se prevé que éste competirá con el mercado financiero (hoy en día en más grande del mundo) en la próxima década.⁴³ Y al respecto hay que mencionar, también, algunos de los principales compradores y comerciantes de bonos de carbono de la ONU: Goldman Sachs, Barclays Capital, Deutsche Bank, BNP Paribas Fortis, Sumitomo, etc, todos ellos especuladores del sector financiero.⁴⁴ Como narra en entrevista la investigadora y activista de la ONG ecuatoriana Acción Ecológica, Ivonne Yanez, una de las principales problemáticas de dicho comercio es que “en teoría cada certificado debería de tener un número y un código, pero como hay tanta especulación, entonces ese mismo certificado puede estar siendo vendido en varias partes.”⁴⁵ Otro dato importante para esta investigación es el hecho de que existen varias empresas internacionales que están comprando bonos de carbono desde la ONU a Ecuador, en las que se incluyen la RWE de Alemania, agentes de Wall Street, Citigroup, JP Morgan Chase, Noble Carbon, Cantor Fitzgerald Europa y la MGM.⁴⁶

A partir de esto último no se puede pensar que únicamente las empresas mencionadas estén interesadas en reducir su huella de carbono, en realidad lo que el mercado de carbono ofrece es “un conducto para la absorción excedente de capital.”⁴⁷ Así, es a partir de la noción de servicios ambientales y, específicamente, del concepto de mercado de carbono que el mismo clima ha sido transportado al plano de la economía, se ha mercantilizado a partir de “un nuevo tipo de contabilidad y nuevas prácticas técnicas y legales”⁴⁸. Esto último porque, desde la economía clásica y las capas dirigentes, se entiende a la crisis climática actual como un simple error de mercado que puede ser corregido por él mismo, como una cuestión de cálculos y costos.

Cabe decir que la realidad ante este nuevo mercado es distinta al ideal. Lohmann argumenta que los incentivos creados por el sistema generan, de hecho, beneficios para las empresas contaminantes, lo cual promueve el continuar invirtiendo en tecnologías fósiles; al mismo tiempo, dicho mercado refuerza las relaciones de poder existentes.⁴⁹ Según Esperanza Martínez y Alberto Acosta, es un “nuevo mercado financiero que reproduce, actualiza y profundiza las formas de dominación”⁵⁰. Retomando a Brenner, podríamos decir que el mercado de carbono es parte de lo que él llama ‘neoliberalismo realmente existente’, una serie de promesas que en la práctica política resultan llenas de fallas, en más polarización social, agudización de las desigualdades sociales, competencia destructiva entre grupos, etcétera.⁵¹

El mercado de carbono es, pues, una forma de crear nuevas ganancias a partir de la crisis ambiental, una revolución pasiva que utiliza a la crisis ambiental y financiera para reinventarse con la ayuda de organismos internacionales y propaganda; esto mismo conlleva a pensar que el

43- Lohmann, Larry, Op. Cit. P. 109.

44- Lohmann, Larry, Op. Cit. P. 340.

45- Yáñez, Ivonne, Investigadora y activista de *Acción Ecológica*, Ecuador, octubre, 2015.

46- Lohmann, Larry, Op. Cit. P. 340.

47- Lohmann, Larry, Op. Cit. P. 334.

48- Lohmann, Larry, Op. Cit. P. 140.

49- Op. Cit.. P 59.

50- Martínez y Acosta, (Prólogo), en: Lohmann, Larry. *Mercados de carbono*, óp. Cit. p 10.

51- Brenner, Neil.” El urbanismo ...”, óp. Cit. P. 3.



problema del cambio climático puede ser resuelto desde el mismo sistema de explotación y producción, sin tomar en cuenta que es ese mismo sistema el que ha conducido a la crisis.

Ahora bien, el mercado de carbono se materializa en distintos programas y proyectos alrededor del mundo, sobre todo enfocados a los países en vías de desarrollo que pueden vender los servicios ambientales que proporcionan sus territorios; uno de los programas más significativos en este rubro es el Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, REDD (por sus siglas en inglés Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Como su nombre lo dice, REDD apunta a reducir la deforestación de los bosques nativos ya que estos son proveedores de servicios ambientales como sumidero de carbono. Con este programa, los dueños de bosques y selvas reciben un incentivo económico que al parecer no afecta los derechos de propiedad de sus territorios; REDD argumenta que su programa busca beneficiar “a países, comunidades, biodiversidades y usuarios de los bosques mientras contribuyen a la importante labor de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero”, buscando que su bosques tengan un mayor valor de pie que talados al obtener un valor financiero a partir de su carbono almacenado.⁵²

Una variación del programa es la de REDD+, que no sólo trata de la deforestación sino que incluye “la conservación, el manejo sostenible y la valoración de los almacenes de carbono de los bosques en la reducción de emisiones;”⁵³ para su preparación se requieren varios esfuerzos del país receptor a partir del apoyo de iniciativas multilaterales.

Y es, pues, en la línea de REDD+ que Ecuador está preparándose para la entrada del programa a través, sobre todo, del Proyecto Socio Bosque. En entrevista con el Coordinador de proyecto del Programa Conservación de bosques y REDD del MAE, Germán Mosquera, éste menciona que a través del programa ONU-REDD-Ecuador se han realizado una serie de estudios que permitirían implementar los mecanismos de REDD dentro de Socio Bosque en un corto plazo; en ese sentido, el PSB podría ser un parangón para la entrada de REDD porque, al igual que este último, funciona a partir de pagos por compensación o por resultados de conservación. No obstante, el PSB se diferencia de REDD porque no vende bonos de carbono ni otros servicios ambientales, sólo da incentivos para las comunidades que conservan. Así pues, el PSB es lo más cercano que puede haber en Ecuador a la iniciativa REDD pero tiene una diferencia fundamental basada en la no mercantilización de los servicios ambientales de los territorios. Sin embargo, también en entrevista con Mosquera, al preguntar cómo es que el PSB entraría al REDD si en la Constitución, en el artículo 74 sobre los Derechos de la Naturaleza, se dice que “los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación”, éste respondió que en el mismo artículo, al final del mismo se dice que los servicios ambientales serán regulados por el Estado para su producción, prestación, uso y aprovechamiento:

“entonces el Estado, tranquilamente, puede hacer un análisis jurídico de los términos y prestaciones, uso y aprovechamiento, delimitar su alcance con instrumentos jurídicos y acomodarlo a las necesidades del tema REDD, entonces de pronto el candado está pero el Estado tiene la potestad de, esa sería la respuesta.”

52- UN-REDD Programme, en: http://www.un-redd.org/AboutUNREDDProgramme/FAQs_Sp/tabid/4827/language/en-US/Default.aspx visitado el 12 de febrero de 2014.

53- Ídem.



Según Mosquera, se puede ver, entonces, que el uso de los Derechos de la Naturaleza puede ir en la línea de mercantilizar a la misma y de, en todo caso, no respetar sus otros derechos como los de los artículos 71, 72 y 73.

Por otro lado, se encuentra, también, que programas como el PSB necesitan de mucho apoyo económico. En el artículo 5 del PSB dice que “el MAE suscribirá convenios necesarios para garantizar la ejecución del PSB”⁵⁴ y en el artículo 6 dice que “gestionará los correspondientes mecanismos de financiamiento para la implementación de este proyecto los cuales serán invertidos exclusivamente en actividades y proyectos que cumplan con los objetivos señalados”.⁵⁵ Así, hasta 2012 el programa era financiado únicamente por el gobierno de Ecuador, sin embargo, después de ese año se comenzó a buscar financiamiento desde empresas privadas y desde otros gobiernos; el gobierno alemán, por ejemplo, ha entregado una donación por 13 millones de euros a incentivos de Socio Bosque,⁵⁶ en ese sentido, el proyecto del Programa Conservación de bosques y REDD está “tratando de financiar desde la cooperación alemana los ideales, técnicos y operativos, para que pueda funcionar REDD en el Ecuador”.⁵⁷ Otro ejemplo es el hecho de que el 26 de marzo de 2014 el PSB hizo un acuerdo de 5 años con la empresa General Motors de Ecuador, la cual se comprometió a aportar 230 mil dólares anuales como parte de su proyecto ‘Chevrolet Sail Carbono Neutro’,⁵⁸ a continuación presento una lámina de tal programa que resulta ser muy ilustradora:



Imagen en <http://es.slideshare.net/innovaec/chevrolet-sail-carbono-neutro-gm-obb-innovacion-es-mas>, consultado el 28 de junio de 2014

54- En Acuerdo Ministerial 169, Registro Oficial 482 de 5 de diciembre de 2008.

55- Ídem.

56- En <http://sociobosque.ambiente.gob.ec/>, visitado el 14 de abril de 2015.

57- En entrevista con German Mosquera, óp. Cit.

58- Kill, Jutta, *REDD: Una colección de conflictos, contradicciones y mentiras*, Montevideo, Uruguay, World Rainforest Movement, Secretaría Internacional, 2015. P. 32

Por la demanda de dinero es que también se busca la entrada de REDD al PSB, ya que éste aportaría grandes sumas monetarias; Mosquera dice que al menos financiaría el 18% del presupuesto de PSB. No obstante, la cuestión financiera no es el único aspecto que se considera para la entrada de REDD, sino que también tiene que ver con la suscripción de Ecuador en el Convenio Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas:

“estamos comprometidos con la reducción de emisiones, sería la primera cosa. La segunda cosa es que siendo prácticos, es la propuesta mundial (...) tendría una verificación internacional y permitiría al Ecuador, incluso, sumarse a esta nueva propuesta de cambio climático en la que se pretende que los países en vías de desarrollo también reduzcamos emisiones.”⁵⁹

Así pues, todo apunta a que la entrada de REDD a Ecuador es inminente, tanto desde el aspecto jurídico, como el económico y, sobre todo, aquél que tiene que ver con la política y los acuerdos internacionales. Tal proyecto internacional de mercantilización del ambiente se respalda, pues, dentro de Ecuador a partir de instancias como el MAE, que al mismo tiempo hacen uso de discursos en pro de los Derechos de la Naturaleza para argumentarlo favorablemente.

Al tal respecto cabe mencionar la participación del MAE en varias de las Cumbres de las Partes sobre Diversidad Biológica (COP). Un ejemplo importante de ello es lo que aconteció en la COP de octubre de 2012 en donde la decisión de incluir el concepto de Derechos de la Naturaleza, propuesta por Ecuador, fue aceptada por todos los países de la COP.⁶⁰ La ministra del ambiente en Ecuador de aquél momento, Marcela Aguiñaga, dijo que lo importante sería buscar mecanismos de financiamiento para lograr cumplir con los Derechos de la Naturaleza: “Hay que generar alianzas entre países y articular iniciativas con el sector privado en la búsqueda de soluciones.” En tal foro también se habló del programa Socio Bosque como una alternativa de conservación para otros países.⁶¹

Sobre la misma línea, el 3 de noviembre de 2014, en el marco de la COP11, se desarrolló el Panel Ministerial de Alto Nivel ‘Uniando los Derechos de la Naturaleza y la Economía Ecológica: Búsqueda de las soluciones para protección de la vida silvestre internacional’, presidido por la Ministra del Ambiente Lorena Tapia, en nombre del Presidente Rafael Correa. En éste, la ministra destacó los hitos ecuatorianos en materia ambiental, entre ellos la construcción de políticas y normas que llevan a la práctica los Derechos de la Naturaleza: “Trabajamos diariamente en establecer políticas que nos permitan fortalecer nuestra gestión y llevar a la práctica acciones concretas que lleven a la consecución de los Derechos de la Naturaleza”.⁶² Asimismo, destacó que el Plan Nacional del Buen Vivir integra al desarrollo con el respeto a los recursos naturales y a la sostenibilidad. Por otro lado, en el mismo panel, el Secretario Ejecutivo de la Convention of Migratory Species (CMS), Brandee Chambers, dijo: “es la primera vez que se debate en un foro como éste y de una manera global varios enfoques sobre la los lineamientos sobre la aplicación de

59- En entrevista con Germán Mosquera, Coordinador de proyecto del Programa *Conservación de bosques y REDD del Ministerio del Ambiente*, Ecuador, Octubre, 2015

60- Disponible en: <http://www.ambiente.gob.ec/paises-aceptan-derechos-de-la-naturaleza/>, visitado el 16 de agosto de 2014.

61- Ídem.

62- Disponible en: <http://www.ambiente.gob.ec/ministra-lorena-tapia-presidio-panel-ministerial-de-alto-nivel-sobre-derechos-de-la-naturaleza/>, visitado el 13 de julio de 2014.



una economía verde relacionada al respeto de los Derechos de la Naturaleza”.⁶³ Se dijo también que “la economía verde es la economía del futuro, nosotros somos los encargados de lograr un cambio en el paradigma para mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, reduciendo de esta manera los riesgos ambientales y ecológicos”; y se enfatizó en solicitar ayuda de las instituciones financieras internacionales para resolver los problemas de calentamiento global y conservación.⁶⁴

De igual forma, el 26 de junio de 2014, la ministra Lorena Tapia, en la 1ª Asamblea Ambiental de la Organización de Naciones Unidas (UNEA, por sus siglas en inglés), presentó una ponencia sobre los Derechos de la Naturaleza contemplados en la Carta Magna y el manejo de vida silvestre en el país. En tal conferencia mencionó que,

“la Constitución de 2008, surge como una respuesta contundente a fin de garantizar el respeto integral de la naturaleza su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos. Con este nuevo enfoque, el Estado ecuatoriano, en el marco de su Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, establece como objetivo nacional ‘Garantizar los derechos de la Naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global’.”⁶⁵

En esa línea, la ministra explicó que el MAE promueve una Política Nacional para la Gobernanza del Patrimonio Natural, apoyada en marcos jurídicos nacionales e internacionales para evitar la deforestación, todo ello enmarcado en la visión del Estado sobre el Buen Vivir basado en un modelo de desarrollo sostenible, a la vez que se busca un cambio en la matriz productiva.⁶⁶

Con todo lo anterior se puede ver que los Derechos de la Naturaleza terminan por favorecer el discurso del MAE en el terreno internacional, ya que a partir de éste se legitima la implementación tanto de la economía verde como del desarrollo sustentable, cuestión que termina siendo contraproducente tanto para los territorios de las comunidades como para la soberanía del país sobre sus recursos naturales que, aunque no se privaticen, se explotan de maneras distintas por parte de organismos internacionales. En ese sentido, el discurso de los Derechos de la Naturaleza es tergiversado con el fin de ser utilizado como argumento a favor de la proliferación de la Economía Verde en Ecuador.

3. Conclusiones: problemáticas de la economía verde y una filosofía de la praxis hacia la sociología ambiental

A todo lo antes dicho cabe mencionar, primero, que proyectos de la economía verde como REDD y REDD+ no pueden ser benéficos para las regiones como la nuestra. Según Yutta Kill, dichos programas “permiten perpetuar un modelo económico basado en la destrucción de la naturaleza con el pretexto de que se ha compensado el daño causado,”⁶⁷ al tiempo que destruyen las comunidades asentadas en dichos territorios. En todos los casos se “han causado perjuicios y han dado lugar a reclamaciones de las comunidades que habitan la zona del proyecto. (...) En varios

63- Ídem.

64- Ídem

65- Disponible en: <http://www.ambiente.gob.ec/ministra-tapia-resalto-el-trabajo-de-ecuador-en-manejo-de-vida-silvestre-y-derechos-de-la-naturaleza-en-segundo-dialogo-ministerial-en-nairobi/>, visitado el 13 de julio de 2014.

66- Ídem.

67- Kill, Jutta, “REDD: una colección de...” Op. Cit. p. 9.



casos nunca se consultó en primer lugar a las comunidades para saber si daban su consentimiento al proyecto de carbono forestal”,⁶⁸ brindando información sesgada o incompleta así como falsas promesas de beneficios y empleos si aceptaban la entrada de REDD a sus territorios; “pero en lugar de las promesas, lo que los aldeanos recibieron fue principalmente acoso, restricciones en el uso de la tierra de la que viven, y acusación de ser responsables de la deforestación y el cambio climático.”⁶⁹ En el caso de Ecuador, su entrada al REDD podría ser devastadora para los pueblos que se encuentran ya en el Proyecto Socio Bosque, por un lado se privatizarían no sus recursos pero sí las acciones sobre ellos, y por otro, fomentaría la despolitización social como veíamos con Swyngedouw, ya que las preocupaciones ambientales se gestionarían mediante lo que él llama política dialógica consensual sin alternativas reales a la verdadera crisis ambiental.⁷⁰ De esa forma, si entendemos al PSB y a REDD como proyectos políticos también se puede ver que tienen, en realidad, objetivos de intervención y de modificación del orden socio-ambiental en las regiones que ocupan, “como cualquier intervención, se trata de un acto violento que borra al menos parte de lo que existía a fin de erigir algo nuevo y diferente.”⁷¹

Es por lo anterior que desde una perspectiva crítica debemos apostar a dilucidar las formas que subyacen a los proyectos de economía verde en la región latinoamericana, entendiendo a estos dentro de un proceso de hegemonía que busca su reestructuración a partir de un tipo de revolución pasiva, que coopta proyectos varios como el de los Derechos de la Naturaleza; esto último es resultado, en términos gramscianos, de una falta de unidad nacional—popular en los llamados proyectos progresistas; en el momento en que estos no logran superar su subalternidad son devorados tenazmente por el proceso hegemónico de la clase dirigente, en este caso la economía verde en particular y el capitalismo neoliberal en general.

El hecho de entender estos procesos es de suma importancia si queremos pensar en alternativas reales a la explotación del humano sobre la naturaleza y del humano sobre él mismo. Según Enrique Leff, se tendría que apostar a una sociología ambiental como “voluntad del poder saber a través de las estrategias de los poderes mundiales que determinan las condiciones de sustentabilidad del planeta, de la cultura, de los imaginarios y los mundos de vida de la gente”⁷² a fin de construir un futuro sustentable.

La llamada filosofía de la praxis, entendida como una conformación de las subjetividades colectivas que emana de una confrontación histórica entre fuerzas subalternas y dominantes, es aquella forma que nos podría llevar del pasaje de la necesidad al de la libertad.⁷³ Para contrarrestar la hegemonía imperante y generar una nueva hegemonía alternativa, con el fin de superar la crisis social, ambiental y de conocimiento, es, pues, fundamental trabajar sobre el plano epistémico, sobre las nociones y entendimientos que tenemos sobre la humanidad y, en este caso, sobre la naturaleza, para conferir un aparato crítico y popular que sostenga las acciones, una nueva concepción total del mundo reflejada en una organicidad social distinta, en términos de Gramsci, una sociedad regulada. Esta sociedad regulada debería, entonces, tener otras visiones alejadas del dualismo hombre-naturaleza, solo de esta

68- Op. Cit. P. 7.

69- Op. Cit. P. 8.

70- Ver: Swyngedouw, Erik, “La naturaleza...” óp. Cit.

71- Op. Cit. P. 61.

72- Leff, Enrique, “Sustentabilidad y racionalidad ambiental...”, óp. Cit. P. 38.

73- Oliver, Lucio (coord.) Gramsci: La otra política, descifrando y debatiendo los cuadernos de la cárcel, México, Ítaca, UNAM, 2013. P. 26.



forma, a partir obviamente de la acción y organización social, es que en verdad se podría pensar en un mundo sustentable, igualitario y justo.

El próximo diciembre del año en curso, el 2015, en París, Francia, se discutirá con mayor detenimiento la entrada y legalización total de REDD a todas las regiones del mundo donde éste ya está comenzando a operar, es decir que se generará el próximo gran acuerdo sobre el clima desde la COP21; será de suma importancia, entonces, que dentro de aquellos organismos internacionales la correlación de fuerzas no sea favorable para el proyecto hegemónico, esto con el fin de detener el avance de la revolución pasiva de la economía verde sobre América Latina y las demás regiones severamente afectadas. Es, pues, dentro de las luchas tanto locales como globales que la filosofía de la praxis debe de insertarse para generar una hegemonía alternativa. ¿Se logrará impedir la progresión del proceso de hegemonía de la economía verde?, la respuesta queda no sólo en las luchas dentro de organismos y convenios internacionales, sino en la lucha desde las trincheras del saber, de la cultura y del territorio de los pueblos en resistencia.

Bibliografía

Ávila Santamaría, Ramiro y Martínez, Esperanza, (ed), El neoconstitucionalismo transformador: El estado y el derecho en la Constitución de 2008, Quito, Editorial Abya Yala, Universidad Andina Simón Bolívar, 2011.

Brenner, Neil, et al., "El urbanismo neoliberal: La ciudad y el imperio de los mercados", en Temas Sociales, Número 66, año 2009, p. 1-11.

Gudynas, Eduardo. El mandato ecológico: Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución. Quito, Ecuador, Ediciones Abya Yala, 2009.

Kill, Jutta, REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras. Montevideo, Uruguay, World Rainforest Movement, Secretaría Internacional, 2015.

Kohan, Néstor, "La gobernabilidad del capitalismo periférico y los desafíos de la izquierda revolucionaria. Crisis orgánica y revolución pasiva: el enemigo toma la iniciativa". Disponible en: <<http://www.rebelion.org/noticias/2006/10/40194.pdf>>. Consultado: 10/2006.

Leff, Enrique., "Sustentabilidad y racionalidad ambiental: hacia "otro" paradigma de sociología ambiental", en Revista Mexicana de Sociología, 73 (1), 2011, p. 5-46.

Lohmann, Larry; Mercados de carbono, la neoliberalización del clima, en: Acosta Alberto, y Esperanza Martínez (compiladores), Quito, Ecuador, ediciones Abya Yala, 2012.

Modonesi, Massimo (coord.), Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci, México, UNAM, 2013. 311 páginas.

Oliver, Lucio (coord.) Gramsci: La otra política, descifrando y debatiendo los cuadernos de la cárcel, México, Itaca, UNAM, 2013.

Sánchez Parga, José. Discursos retroevolucionarios: Sumak Kausay, derechos de la naturaleza y otros pachamamismos. En: Revista Ecuador Debate, no. 84, Quito, Ecuador, diciembre 2011. P. 31-50.

Swyngedouw, Erik, "La naturaleza no existe: La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada", en: Urban 1, 2001, p. 41-66.

Tsing, Anna, "La naturaleza en construcción", en: Montenegro Martínez, Leonardo (ed.), Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de la independencia de Colombia; Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestion Mutis; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. P. 196-224.



Documentos

Acuerdo Ministerial, todos los folios desde 2008. Ministerio del Ambiente, Proyecto Socio Bosque. SENPLADES, Oficio No- SENPLADES-SIP-dap-2008-21 de fecha 2 de Julio de 2008.
Acuerdo Ministerial 169, Registro Oficial 482 de 5 de diciembre de 2008.
Convenio de Ejecución entre el Proyecto Socio Bosque del Ministerio del Ambiente y Ejecutor. Ministerio del Ambiente, PSB. Disponible en: <http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/imagenes/articulos/archivos/convenio-colectivos-bosque1.pdf>; consultado el 14 de abril de 2015.
Manual Operativo PSB, MAE, 2010.

Web

<http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml>. Consultado el 10 de noviembre de 2012.
<http://sociobosque.ambiente.gob.ec/> consultado el 14 de abril de 2015.
<http://www.sinia.cl/1292/w3-article-48291.html>, consultado el 18 de agosto de 2015.
http://www.un-redd.org/AboutUNREDDProgramme/FAQs_Sp/tabid/4827/language/en-US/Default.aspx, consultado el visitado el 12 de febrero de 2014.
<http://es.slideshare.net/innovaec/chevrolet-sail-carbono-neutro-gm-obb-innovacion-es-mas>, consultado el 28 de junio de 2014.
<http://www.ambiente.gob.ec/paises-aceptan-derechos-de-la-naturaleza/>, consultado el 16 de agosto de 2014.
<http://www.ambiente.gob.ec/ministra-lorena-tapia-presidio-panel-ministerial-de-alto-nivel-sobre-derechos-de-la-naturaleza/> consultado el 13 de julio de 2014.
<http://www.ambiente.gob.ec/ministra-tapia-resalto-el-trabajo-de-ecuador-en-manejo-de-vida-silvestre-y-derechos-de-la-naturaleza-en-segundo-dialogo-ministerial-en-nairobi/>, consultado 13 de julio de 2014.

Entrevistas

Mosquera, Germán, Coordinador de proyecto del Programa Conservación de bosques y REDD del Ministerio del Ambiente, Ecuador, Octubre, 2015.
Yáñez, Ivonne, Investigadora y activista de Acción Ecológica, Ecuador, Octubre, 2015.

